



NUE ACUM 112 y 119-A-2020 (RS)

██████████ contra Dirección General de Centros Penales -DGCP-
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cuatro minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento fue promovido por ██████████ en contra de dos resoluciones emitidas por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales** (en adelante **DGCP**): la primera, de fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/098/2020; y la segunda, de fecha once de agosto del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/104/2020.

A. En la solicitud de referencia UAIP/OIR/098/2020, el ciudadano solicitó la información correspondiente a: "1) *Detalle de nombres de personas o empresas que prestaron los servicios profesionales*; 2) *Detalle de cada uno de los servicios profesionales del mes de abril del presente año*; 3) *Detalle del valor de cada uno de los servicios incluidos*; 4) *Copia de la planilla de servicios profesionales del mes de abril del presente año*."

En este sentido, en relación a los ítems 1, 2 y 3, la oficial de información de la **DGCP** resolvió entregar la información emitida por la Coordinación de Tiendas Institucionales de la Dirección General de Centros Penales; y en cuanto al numeral 4, la referida servidora pública resolvió que la unidad correspondiente no emitió respuesta.

Por su parte, el apelante se mostró inconforme con dicha resolución por los motivos siguientes: a) *sobre el ítem 1, no se proporcionó ningún nombre de empresas o personas que prestaron los servicios*; b) *sobre el ítem 2: no se entregó el detalle de servicios prestados, y hay rubros que no son coincidentes con la legislación vigente ni con las políticas penitenciarias actuales*; c) *ítem 4: no proporcionan copia de planilla o recibos de los pagos hechos. Aunado a lo anterior, señaló que desde hace unos meses las respuestas de*



OIR/DGCP no adjuntan copia de la respuesta recibida, por lo que TODA la información que proporcionan no tiene firma responsable de quien supuestamente remitió respuesta a la Oficial de Información.

B. En la solicitud de referencia UAIP/OIR/104/2020, el ciudadano solicitó la información correspondiente a: *"1) Los nombres de personas o empresas que prestaron los servicios (pagos de planillas por servicios profesionales septiembre 2019 de los \$144,850.71); y 2) Detalle de los mismos y el monto pagado en cada uno de los servicios prestados"*.

Al respecto, la oficial de información de la DGCP resolvió en relación a proporcionar los nombres de personas o empresas que prestaron los servicios profesionales, que no puede brindarse de conformidad al art. 33 y 34 de la LAIP; y en cuanto al detalle de los mismos y el monto pagado en cada uno de esos servicios prestados, relaciona un cuadro denominado: *"Reporte de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2019"*.

El apelante se mostró inconforme con dicha resolución por los motivos siguientes: a) que lo solicitado obedece a nombres de personas y empresas, y no datos personales, como lo especifica la legislación citada por el ente obligado; b) que el cuadro proporcionado no detalla nombre ni cantidad de empleados que han recibido esos emolumentos; y c) que lo entregado no tiene firma del responsable de la información, en este caso, de la instancia de Tiendas Institucionales que proporcionó la información, por lo que los datos no corresponden a lo solicitado.

El Instituto admitió ambos recursos por separado, en su momento, bajo las referencias NUE 112-A-2020 / NUE 119-A-2020, respectivamente. Posteriormente, mediante auto emitido a las diez horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, este Instituto advirtió que ambos procedimientos cumplieran con las condiciones y requisitos establecidos por la ley para ser acumulados, puesto que existe la misma identidad de ente obligado, de apelante y las pretensiones versan sobre información de similar naturaleza, esto con base al Art. 79 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual establece que *"el funcionario o autoridad que inicie o tramite cualquier expediente, podrá de oficio o a instancia del interesado, ordenar su acumulación a otros expedientes con los*

que guarde identidad sustancial o íntima conexión". En consecuencia, se resolvió acumular ambos procesos y conocerlos bajo la referencia NUE ACUM 112 y 119-A-2020 (RS).

II. En plena observancia y respeto al derecho de defensa y audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de LAIP, se corrió traslado a la **DGCP** para que rindiera su informe justificativo en ambos procedimientos.

En ambos informes, el ente obligado argumentó —en lo esencial— que la información solicitada se encuentra en poder del Ministerio Público Fiscal; en razón del procedimiento de allanamiento con secuestro de información en la unidad de tiendas institucionales. Asimismo, indicó el apoderado de la DGCP, que dicha diligencia fue autorizada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C", por medio del auto emitido a las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del corriente año.

En razón de ello y con base al Art. 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública - LAIP-, el cual señala que toda persona puede solicitar información que se encuentre en poder de los entes obligados, señalan dichos informes que lo requerido no se encuentra en poder de esa institución, sino que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la República, por haberse allanado y secuestrado información relacionada con las tiendas institucionales.

III. La audiencia oral del presente caso se llevó a cabo con la presencia del apelante: [REDACTED] en su calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la **DGCP**.

En la fase probatoria de dicha audiencia, la parte apelante ofreció como prueba documental: a) Resolución emitida por la oficial de información de la Dirección General de Centros Penales, con número de referencia UAIP/OIR/CIENTO CINCUENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTE, de fecha ocho de octubre del año dos mil veinte, junto con sus respectivos anexos; b) Resolución emitida por la oficial de información de la Dirección General de Centros Penales, con número de referencia UAIP/OIR/CIENTO SESENTA /DOS MIL VEINTE, de fecha doce de octubre del año dos mil veinte, junto con sus respectivos anexos; y c) Resolución emitida por la oficial de información de la Dirección General de Centros Penales, con número de referencia UAIP/OIR/CIENTO SESENTA Y OCHO/DOS MIL VEINTE, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veinte, junto con sus respectivos anexos.



Por su parte, el ente obligado ofreció como prueba documental: a) copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del corriente año, dictada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador; y b) Oficio con número de referencia TRESCIENTOS OCHO-DOS MIL VEINTIUNO, de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República.

Luego de escuchar las argumentaciones de ambas partes con relación a la prueba aportada por las mismas, el Pleno de Comisionados y Comisionadas deliberó sobre estas y con base a lo establecido en los artículos trescientos diecisiete al trescientos veinte del Código Procesal Civil y Mercantil, rechazó por unanimidad la totalidad de la prueba aportada por el apelante, por considerarla no útil y pertinente en el presente procedimiento; y en relación a la prueba ofrecida por el ente obligado, el Pleno de Comisionados admitir por unanimidad la prueba relacionada a la copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del corriente año, dictada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador por considerarla útil y pertinente al presente caso; y en relación a la prueba consistente en Oficio con número de referencia TRESCIENTOS OCHO-DOS MIL VEINTIUNO, de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República, el pleno de Comisionados resolvió por unanimidad rechazarla por considerarla no útil y pertinente al presente procedimiento.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en la cual la parte apelante argumentó -en lo medular-, que no le fue entregada la información requerida, ni le fue proporcionan los nombres de las personas y empresas que ofrecieron servicios en las tiendas institucionales, argumentando que es información confidencial. En este sentido, requirió que se cumpla con la ley y que le sea entregada cuando finalice la investigación de la fiscalía.

En cuanto a los alegatos brindados por el apoderado del ente obligado, argumentó -en lo medular-, que las tiendas institucionales sufrieron un allanamiento requerido por la Fiscalía General de la República, a raíz de unas diligencias de investigación que se encuentran en proceso por parte de dicha entidad. De igual forma, argumentó que a raíz de dicha investigación existe una declaratoria de reserva con base a lo establecido en el art. 19

letra f) de la LAIP, en relación con el Art. 76 del Código Procesal Penal, lo cual fue avalado por el Juzgado de Instrucción C de San Salvador.

En este sentido, alegó que si el ciudadano tiene la necesidad de conocer la información que fue solicitada a la **DGCP**, dirija su petición al ente que posee la misma, siendo para este caso la Fiscalía General de la República, ya que si bien "Tiendas Institucionales" es el ente que generó la información, es dicho ministerio público quien la posee. Por tanto, solicitó que si este Instituto resuelve a favor de entregar la información, que sea solicitada a dicho Ministerio Público y no a la DGCP, ya que la FGR es quien posee la información solicitada en la actualidad.

Análisis del caso:

Una vez establecido lo anterior, el objeto de controversia del presente caso se delimita de la siguiente manera: *"a) Detalle de nombres de personas o empresas que prestaron los servicios profesionales; b) Detalle de cada uno de los servicios profesionales del mes de abril del presente año; c) Detalle del valor de cada uno de los servicios incluidos; d) Copia de la planilla de servicios profesionales del mes de abril del presente año; e) Los nombres de personas o empresas que prestaron los servicios (pagos de planillas por servicios profesionales septiembre 2019 de los \$144,850.71); y, f) Detalle de los mismos y el monto pagado en cada de los servicios prestados"*.

En este sentido, el análisis jurídico del presente caso seguirá el *iter* lógico siguiente: **I)** Breves consideraciones del principio de máxima divulgación y sus efectos; **II)** Breves referencias con respecto a la información pública e información pública oficiosa, así como su valcración al presente caso; y **III)** Valoración de la prueba y consideraciones con respecto al secuestro de la información requerida por el ciudadano, por parte de la Fiscalía General de la República.

I. Tal como ya lo ha sostenido este Instituto, el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han establecido que el derecho de acceso



a la información debe estar regida por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII/O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son: a) El derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) La carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación.⁷

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII/O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI/RES_147_LXXIII/O/08.p

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem.

⁷ Ídem.

II. Con base a lo anterior, es importante mencionar que dentro del ámbito del derecho de acceso a la información pública existe información que es considerada pública e información que es considerada pública oficiosa.

En este contexto, se debe definir el término de información pública, para ello, la LAIP en su artículo 6 letra "c" determina que: "es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título".

Por otro lado, de conformidad al principio de transparencia activa, existe cierto tipo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, surgiendo así la categoría de información pública oficiosa, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 y siguientes de la LAIP.

En este sentido, cabe mencionar que tal como establece el Manual de Operaciones y Funciones de la **DGCP**, las "Tiendas Institucionales" es una unidad dependiente de la Subdirección Administrativa, la cual tiene por objeto controlar y administrar los recursos generados por las tiendas institucionales en los centros penitenciarios del país, así como brindar programas de asistencia social a las personas privadas de libertad, y satisfacer necesidades inmediatas del establecimiento penitenciario.

Asimismo, el Manual Operativo de las Tiendas Institucionales, que también se encuentra en el portal de transparencia de la **DGCP**, establece que los bienes y servicios contratados, con los beneficios o frutos producto de la actividad de las tiendas institucionales, adoptarán los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su reglamento y Legislación de la Administración Financiera del Estado, en lo que fuera aplicable.

En consecuencia, este Instituto advierte que la información que es objeto de controversia en el presente caso, la cual está relacionada a los servicios profesionales, constituye información pública oficiosa, de conformidad a lo establecido en el Art. 10



numeral 19 de la LAIP; y Art. 1.18 del Lineamiento número 2 para la Publicación de Información Oficiosa, que se refiere a las adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Por lo que, con base a dichas disposiciones citadas anteriormente, lo relacionado a los montos; detalle de los servicios profesionales prestados; y los nombres de los que prestaron dichos servicios, ya sean personas naturales o jurídicas, deben de estar a disposición de los ciudadanos si necesitan que estos sean solicitados.

III. Ahora bien, en relación a la prueba ofertada por el apoderado del ente obligado consistente en: la copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del día ocho de septiembre del corriente año, dictada por el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador, el ente obligado ha demostrado que, en efecto, existe una orden judicial para la realización de un allanamiento y secuestro de información solicitado por la Fiscalía General de la República a las Tiendas Institucionales de la DGCP.

Dicho esto y con relación a la mencionada diligencia, este Instituto tiene a bien establecer que, en primer lugar, un allanamiento, tal como lo describe la jurisprudencia⁸, significa *entrar por la fuerza a una casa ajena o contra la voluntad de su dueño*. En segundo lugar, en cuanto al secuestro de información, el Art. 283 del Código Procesal Penal (CPP) establece que el fiscal durante el desarrollo de las diligencias de investigación, dispondrá que sean incautados o recolectados y conservados los objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo y aquellos que puedan servir como medios de prueba.

Asimismo, la jurisprudencia⁹ define el secuestro de bienes como *un acto de orden procesal que consiste en la recolección y aseguramiento de ciertos objetos para su ingreso a control judicial con la finalidad de garantizar su identidad e integridad*. Asimismo, lo define como *una medida cautelar de carácter patrimonial que consiste en aprehender o sustraer objetos, cosas, instrumentos o efectos relacionados con el hecho delictivo que se investiga*.

De igual manera, hay que mencionar que en razón de la naturaleza de este proceso judicial, tal como lo establece el Art. 191 del Código Procesal Penal (CPP), *cuando haya un*

⁸ Resolución pronunciada por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las quince horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre del año dos mil doce. Referencia No. 140-12-9

⁹ Resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las doce horas del uno de febrero del año dos mil diecisiete. Referencia No. 32-2017.

motivo fundado para presumir que en un lugar público o privado existen objetos relacionados con la comisión del hecho punible que se investiga, o que allí puedan efectuarse detenciones, el fiscal (siendo lo que ocurrió en este caso) deberá solicitar al juez la expedición de una orden de registro de ese lugar (...).

Habiendo dilucidado lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Art. 76 del CPP, el cual establece que: (...) *las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso*, este Instituto determina que, por esta vez, no es posible entregar la información solicitada por el ciudadano, debido a que se ha demostrado ante esta sede administrativa, que existen diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República en las tiendas Institucionales de la **DGCP**.

En consecuencia, este Instituto como principal garante del derecho de acceso a la información pública, confirmará por esta vez el argumento de la **DGCP**, debido a la imposibilidad que concurre en la actualidad para que la **DGCP** pueda entregar dicha información.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 85 de la Cn, 58 letra "d", 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP, 79 y 135 de la LPA, este Instituto, **resuelve:**

a) **Confirmar** por esta vez las resoluciones pronunciadas por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales -DGCP-**, la primera de fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/098/2020; y la segunda de fecha once de agosto del año dos mil veinte, bajo la referencia UAIP/OIR/104/2020.

b) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

c) Archivar el presente procedimiento al momento que la presente resolución tenga grado de firmeza.

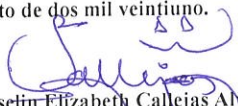
d) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-

PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN

JJ/JH

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintiuno.


Jossetin Elizabeth Callejas Alvarado
NOTIFICADORA INTERINA
IAIP

